



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintitrés de septiembre de dos mil veinte

18-228

Proceso: **APELA SENTENCIA**
Demandantes: **MARTA INÉS GARCÍA RESTREPO**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-015-2018-00326-01**
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

Se reconoce personería a la doctora ANA MARIA TORO TORO identificado (a) con C.C. No. 1.020.470.553 de Bello (Antioquia) y portador (a) de la T.P. No. 313.795 del C.S de la J, para que represente los intereses de COLPENSIONES, conforme sustitución de poder que le hiciera la apoderada VICTORIA ANGÉLICA FOLLECO ERASO, identificada como aparece al pie de mi firma, abogada en ejercicio con la tarjeta profesional número 194.878 del C.S. de la J. en calidad de representante legal de la firma RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes de la Sala el proyecto aprobado en sala virtual en el **ACTA 27** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende la demandante que se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su madre BLANCA OLIVA RESTREPO, a partir del 16 de

octubre de 2016, por haber sido la persona que siempre estuvo a su lado y depender económicamente de ella, por lo que al fallecer quedó completamente desprotegida, enferma, sin techo y sin alimentos.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS HECHOS:

- Que el 16 de octubre de 2012 falleció su madre BLANCA OLIVA GARCÍA, después de padecer de Alzheimer durante más de 10 años, teniendo la calidad de jubilada del ISS, porque fue empleada de dicha entidad durante más de 23 años.
- Que en el año 1999 se trasladó desde su residencia ubicada en la ciudad de Santa Marta a la ciudad de Medellín con el objetivo de cuidar a su madre, porque sus hermanos ya no podían estar con ella.
- Que el cuidado de su madre implicaba dedicación de tiempo completo, por lo que no tenía oportunidad de laborar y en cambio su madre le daba todo lo necesario para su subsistencia como techo, comida, salud y vestuario, ya que su progenitora era pensionada del ISS y también recibía la pensión de su padre LUIS FELIPE GARCÍA.
- Que cuando su madre empeoró, sus hermanos comenzaron a robarle y hacer prestamos a su nombre, por lo que se tramitó un proceso de interdicción, donde se le nombró a ella como curadora por ser la persona más idónea.
- Que al fallecer su madre, quedó sin el mínimo vital, no tenía con que pagar el arriendo porque la casa materna la vendieron sus hermanos y no le dieron nada.
- Que con base en un documento donde su madre registró que era quien veía por ella, solicitó a Colpensiones la pensión de sobrevivientes, incluso hubo un fallo de tutela para obtener respuesta, pero COLPENSIONES nunca cumplió aduciendo que sus hermanos Mauricio y Javier también estaban pidiendo la prestación, pero que se las habían negado porque ellos estaban pensionados, pero a ella nunca le respondieron de fondo y en el Consejo de Estado se adujo que existían otros mecanismos para acceder a la prestación.
- Que la solicitud se hizo por tutela porque al morir su madre ella quedó enferma y sin el mínimo vital, estuvo viviendo de la caridad publica, porque tenía 60 años de edad y presenta dificultades para trabajar debido a que padece de artrosis y anemia aguda y por tanto al faltarle la pensión de su madre le impide llevar una vida digna, pues carece de recursos económicos para cubrir de manera satisfactoria sus necesidades básicas, ya que no tiene recursos propios, no recibe ayuda del Estado y a sus hijos no les alcanza para ayudarle porque lo poco que ganan es para los gatos de manutención de sus propios hogares.
- Que por razón de sus enfermedades se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, porque con la cirugía de cabeza, se ha disminuido su vitalidad, se siente cansada, con somnolencia, fatiga, además de su problema de artrosis por más de 18 años, que exigió que le hicieran un trasplante total de rodilla derecha, además de que le dio un infarto.

- Que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes le corresponde por haber sido ella quien cuidó a su madre durante muchos años antes de su enfermedad y haber sido su tutora.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvertió COLPENSIONES el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que únicamente acepta como cierto la fecha de deceso de la causante y su calidad de pensionada como empleada del ISS. Respecto a los demás hechos señaló que no le constan, por lo tanto, deben ser acreditados por la parte actora.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, en **sentencia** proferida el 16 de octubre de 2018, **ABSOLVIÓ** a **COLPENSIONES** de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora **MARTA INÉS GARCÍA RESTREPO**, a quien condenó en costas fijando las agencias en derecho en la suma de \$781.242

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. ARGUMENTOS DE LA JUEZ

Señaló que conforme la prueba recaudada quedó acreditado que la señora BLANCA OLIVA RESTREPO BALVÍN falleció el 16 de octubre de 2012, teniendo la calidad de pensionada por parte del ISS. Sin embargo, la demandante no cumplió con la carga de demostrar que acreditaba los requisitos exigidos para beneficiarse de la pensión de sobrevivientes conforme lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1933 modificado por la ley 797 de 2003, que estipula como beneficiarios a los hijos inválidos del causante siempre y cuando dependieran económicamente de este, dado que no probó la calidad de hija respecto de la pensionada fallecida, pues no se allegó registro civil de nacimiento, documento que tampoco fue aportado al trámite administrativo adelantado ante la entidad que fue allegado en CD; además la actora tampoco demostró que tuviera la calidad de inválida, toda vez que no existe dictamen que así lo haya determinado y menos aún nada se acreditó respecto a la dependencia económica de la demandante respecto a la causante, ya que niquiera se solicitó prueba testimonial, por lo que absolvió a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra.

2.2. APELACIÓN DE LA DEMANDANTE

La demandante, quien actúa en causa propia en su calidad de abogada, señaló que su certificado de nacimiento sí fue allegado, inclusive lo escribió en la demanda, que sus hermanos lo borraron y el que allegó tiene arriba el borrón donde sus hermanos le quitan el apellido Restrepo, más no pudieron falsificar completamente dentro del propio libro de registro civil de nacimiento, el nombre de su madre BLANCA OLIVA RESTREPOR BALVÍN, como lo reza en el documento que allegó con la demanda, documento que también tiene COLPENSIONES.

De otro lado indica que le tocó ponerle una tutela a COLPENSIONES porque negaba que su madre fuera pensionada del ISS, decía su madre recibía una pensión de vejez y su madre fue trabajadora del ISS durante 23 años.

Agrega que ella se vino desde Santa Marta a cuidar de su madre, porque su madre estaba enferma y por tanto no pudo seguir haciendo lo que hacía para conseguir su sustento y no pudo seguir cotizando a pensión, toda vez que al venirse para Medellín a cuidar a su madre, su hermano le prometió brindarle lo necesario a ella y a sus hijos, pero al año lo mataron y ella quedó solo con lo de su mamá.

De otro lado indica que ella aportó documentos donde consta que le solicitó a Colpensiones su calificación y cada que iba a Colpensiones para ser calificada le decían que no la podrían calificar porque tenía pendientes unas cirugías.

Finalmente señaló que cuando su madre murió ella quedó sin nada, toda vez que quién veía por ella era su madre, por lo que quedó completamente en la calle, por tanto, conforme a las sentencias de la Corte Constitucional que dicen que si una persona queda sin el mínimo vital como quedó ella el día que su madre murió, se debe reconocer la pensión.

2.3. ALEGATOS DE COLPENSIONES

La apoderada de la entidad demandada indica que debe confirmarse la decisión absolutoria de primera instancia, toda vez que la demandante no acredita ninguno de los requisitos exigidos para acceder a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de la señora BLANCA OLIVIA RESTREPO BALVÍN, puesto que no probó su parentesco, al no allegarse el registro civil de nacimiento o partida de bautismo donde se ostente tal calidad, siendo esta la prueba idónea para acreditar el cumplimiento de los requisitos enumerados por la Ley 797 de 2003 a fin de acceder a lo pretendido. Agrega que tampoco se acreditó el estado de invalidez de la demandante, al no obrar en el expediente dictamen de pérdida de capacidad laboral o a lo sumo pruebas que permitan inferir con cierto grado de certeza que efectivamente

la demandante tiene una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% y tampoco se acredita la dependencia económica ni con la prueba documental.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

El problema jurídico se centra en determinar si la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de la señora BLANCA OLIVA GARCÍA BALVIN.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, no comporta objeto de discusión que el fallecimiento de la señora BLANCA OLIVA RESTREPO BALVÍN ocurrió el 16 de octubre de 2012, fecha para la cual ostentaba la calidad de pensionada, según lo acepta COLPENSIONES en la respuesta en la demanda y en la Resolución GNR 106736 de 2015, obrante en el expediente administrativo allegado por la entidad a folio 51.

Por tanto, para efectos de determinar quienes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, es preciso acudir a lo dispuesto en la norma vigente para el momento del fallecimiento, es decir, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993 y que en su literal c), en lo que interesa a la Sala, dispone:

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

c) ... los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, *esto es, que no tienen ingresos adicionales* mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

(...)

PARÁGRAFO. *Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.”*

De la lectura del artículo transcrito se desprende que para que los hijos sean beneficiarios de la pensión de sobrevivientes deben acreditar no sólo dependencia económica respecto del “padre” fallecido y la calidad inválidos sino además el vínculo con éste, por lo que la señora MARTA INÉS GARCÍA debía acreditar en primer lugar su calidad de hija respecto de la pensionada fallecida.

Por su parte el Decreto 1889 de 1994, que reglamentó la Ley 100 de 1993 en su artículo 13, indica que el estado civil y el parentesco del beneficiario de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional, se prueba con el certificado del registro civil. Dicha norma reza:

“PRUEBA DEL ESTADO CIVIL Y PARENTESCO. El estado civil y parentesco del beneficiario de la pensión de sobrevivientes, se probará con el certificado de registro civil.

PARAGRAFO. *Para las personas nacidas con anterioridad al 15 de junio de 1938 su estado civil se acredita conforme al Decreto 1160 de 1970.”*

En el caso de autos, la parte actora, contrario a lo que afirma en su recurso, no allegó al proceso registro civil de nacimiento que de cuenta del parentesco con la pensionada fallecida, por lo que no es posible deducir que efectivamente la señora BLANCA OLIVA RESTREPO fuera la progenitora de la señora MARTA INÉS GARCÍA. Así mismo, según documentos allegados por COLPENSIONES en CD a folio 51, es claro que la actora, tampoco aportó a dicha entidad el registro civil de nacimiento cuando hizo la solicitud pensional, por lo que se le requirió en varias oportunidades indicándole que sin dicho documento no era posible estudiar la solicitud pensional y finalmente se le negó la prestación a través de la Resolución GNR 106736 de 2015, pues no se pudo establecer su calidad de hija de la causante.

Por consiguiente, pese a que en la demanda se afirme que la demandante es hija de la señora RESTREPO BALVIN, y que se hubiere allegado una declaración rendida por esta donde afirma que velaba económicamente por su hija MARTA INÉS GARCÍA (fl 7), este documento no es idóneo para probar el parentesco con la causante y en parte alguna puede reemplazar el documento que la ley ha estatuido para tal fin, cual es el registro civil de nacimiento, por lo que no puede tenerse como probado este hecho.

Ahora, en gracia de discusión, pese a que no se probó la calidad de hija, debe indicarse que la señora MARTA INÉS GARCÍA tampoco acreditó su calidad de inválida, conforme lo estipula el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, es decir, que tuviera una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, pues si bien al proceso se allegan apartes de la historia laboral de la actora que dan cuenta que presenta quebrantos en su salud, esto no es prueba de que padezca una invalidez.

Al respecto es importante mencionar que el estado de invalidez debe ser determinado conforme lo preceptúa el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 que dispone:

“El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación. Este manual será expedido por el Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales⁶ - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a

las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.”

En éste sentido se destaca la importancia que tienen dichos conceptos, dado que éstos en principio constituyen el fundamento para que las entidades que administran el Sistema de Seguridad Social deciden sobre el reconocimiento y pago de determinadas prestaciones económicas a las que podría tener derecho una persona, sin que sea admisible, sin fundamento alguno, apartarse de su contenido, incluso un juez no estaría facultado para dictaminar en forma definitiva y **sin el apoyo de especialistas en la materia**, asuntos tan técnicos como la distribución porcentual que apareja una patología, toda vez que es un hecho que debe ser establecido científicamente, conocimiento que claramente escapa al resorte de las competencias de un operador jurídico, precisamente se vale de especialistas en la materia para efectos de esclarecer los hechos objetos de controversia. Así lo consagra la ley estatutaria de administración de justicia, Ley 270 de 1996, cuando se refiere a la conformación de las listas de auxiliares como apoyo a los falladores dados sus conocimientos técnicos y científicos, con medios idóneos para la calificación a partir de un grupo interdisciplinario, de ahí que las juntas de calificación no sean las únicas facultadas para emitir dictámenes válidos al interior de un proceso judicial, ni se espere del fallador un análisis médico.

Ahora, el argumento de la parte actora para no haber allegado el referido dictamen es que COLPENSIONES se ha negado a realizárselo al tener cirugías pendientes, sin embargo, la demandante pudo acudir directamente a las JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVÁLIDEZ o incluso pudo haber solicitado a través del presente proceso que se nombrara un perito que determinara su pérdida de capacidad laboral, constituyéndose en una de las pretensiones de la demanda, pues como se dijo es un asunto técnico que debe ser determinado por los órganos competentes.

Por lo tanto, encuentra la Sala que si bien la demandante puede padecer varias enfermedades que han menguado su estado de salud, con las pruebas allegadas al proceso no es posible determinar que efectivamente se trate de una persona inválida, ya que el juez no es el encargado de determinar dicho asunto, sino que la Ley ha determinado los mecanismos y los entes competentes para tal fin y por tanto al no existir dictamen alguno dentro del plenario que de cuenta que la señora MARTA INÉS GARCÍA tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50% no puede considerarse como inválida y por tanto tampoco acredita el requisito establecido en el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la prestación deprecada.

Finalmente debe indicarse que, aunque estuviesen acreditados los primeros requisitos a igual conclusión llegaría la Sala, dado que no tampoco se probó la dependencia económica de la demandante respecto a la causante para la fecha del fallecimiento, pues si bien existe una declaración de la fallecida en ese

sentido, la cual reposa a folio 8 del plenario, la misma data del año 2004 y el fallecimiento de la señora BLANCA OLIVIA se dio varios años después, por lo que dicho documento no permite establecer como era la situación económica de la actora para el momento de la muerte de la pensionada ocurrida en octubre de 2012 y la única prueba al respecto fue el interrogatorio de parte absuelto, frente al cual bastará con decir que su finalidad es provocar una confesión, no demostrar un hecho, dado que a nadie le es permitido constituir sus propias pruebas. Y es que lo manifestado por la demandante, a su favor, al dar respuesta a las preguntas formuladas en el aludido interrogatorio o al formular los hechos de la demanda, no tiene carácter probatorio, pues sólo es la versión de parte interesada. Al respecto, nuestro órgano de cierre, en sentencia de radicación 39.050 precisó que:

“En otro orden de consideraciones, juzga conveniente la Sala recordar que ha sido conteste y reiterada la jurisprudencia de la Corte en incontables providencias, en el sentido de explicar que el interrogatorio de parte no es un medio de convicción calificado en la casación del trabajo sino, en la medida que entrañe confesión. Pero lo que resulta totalmente inadmisibles es que el interrogatorio vertido por la parte en el proceso constituya prueba en su favor.”

Se insiste entonces que, según el Artículo 167 del Código General del Proceso, la carga probatoria que en tal sentido tiene cada una de las partes está determinada por la finalidad que éstas persiguen, para el caso de la demandante, el probar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma contentiva del derecho deprecado, presupuestos indispensables para analizar la procedencia de la pensión solicitada, pues la simple afirmación de que era hija de la causante, que es inválida y que dependía económicamente de ella no basta para reconocer la pensión de sobrevivientes, lo que comporta necesariamente una decisión desfavorable a las súplicas de la demandante.

En consecuencia, se concluye que en este informativo no existen las bases probatorias suficientes para acceder a la petición formulada en el libelo introductorio de este proceso, y por lo tanto se CONFIRMARÁ la decisión del despacho de ABSOLVER a COLPENSIONES de las pretensiones formuladas en su contra.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 16 de octubre de 2018 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora **MARTA INÉS GARCÍA, c.c. 36.531.989** contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$877.803.

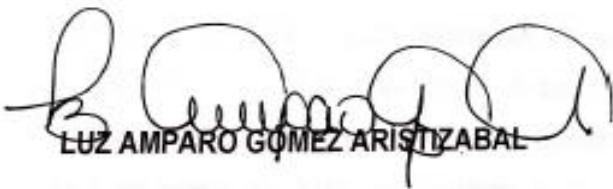
Lo anterior se notificará en ESTADOS, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados

(firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS No. 139 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.
Medellín 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Secretario